

Asunto: Derecho de acceso a la información pública.

Nº Expte.: 001-082316

Fecha: 18/10/2023

Con fecha 18 de septiembre de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por Dña. XXX solicitud que quedó registrada con el número reseñado en el encabezamiento.

En dicha solicitud se requiere información relativa a la finca conocida como “El Doctor” en los siguientes términos: “información sobre unos terrenos que, tengo entendido, dependen del Ministerio de Defensa. Se encuentran ubicados en la carretera CM 4117 Km. 12, en Daimiel, Ciudad Real

Según Google Maps, aunque está pixelado, se llama “El Doctor”.

Queríamos saber cuál es el uso que se da a esas instalaciones.”

Con fecha 26 de septiembre de 2023 esta solicitud se recibió en esta Dirección General de Infraestructura, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

De acuerdo con la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional.

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

El Criterio Interpretativo núm. CI/002/2015, de fecha 24 de junio de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, considera que los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo.

En este sentido, el Consejo de Transparencias señala que su aplicación no será en ningún caso automática, antes al contrario, deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluables

Del mismo modo, se concluye, en que es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancias del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).

Una vez analizada el contenido de lo requerido por el solicitante, esta Dirección General considera que la divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la seguridad nacional, toda vez que su difusión desvelaría extremos que afectarían negativamente a la adecuada garantía de las instalaciones objeto de protección; sin que, por parte del interesado, se haya alegado o acreditado un interés público o privado de carácter superior que fundamente el acceso solicitado.

Por todo lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, se deniega el acceso a la información pública cuya solicitud ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

La presente Resolución tendrá que notificarse a través del portal de transparencia, según lo señalado por el propio instante, haciéndose constar al interesado que contra ella puede interponerse reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación que se efectúe (arts. 23 y 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) o en su caso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del recurrente, a elección de éste (art 20-5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y arts. 10-1 i), 14-1 segunda, 36-4 y demás que resultan de aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, contados también desde el día siguiente a la notificación que se efectúe.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Luis Cebrian Carbonell